



AUTO INTERLOCUTORIO

PROCESO	Ejecutivo
EJECUTANTE	Alba Liria Arango de Montoya
EJECUTADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-019-2022-00483-01
TEMA	Mandamiento de pago
DECISIÓN	Confirma el auto recurrido

El trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, procede a dictar auto interlocutorio de segunda instancia dentro del proceso ejecutivo promovido por **ALBA LIRIA ARANGO DE MONTOYA** contra la **ADMINISTRADO COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-**, con radicado 05-001-31-05-019-2022-00483-01.

A continuación, se toma la decisión correspondiente mediante providencia interlocutoria, según acta de discusión de proyectos **N° 081**, aprobada por los integrantes de la Sala.

- **AUTO RECURRIDO:**

Mediante auto del 7 de diciembre de 2022, el Juzgado Decimonoveno Laboral del Circuito de Medellín libró mandamiento de pago en favor de la accionante y en contra de Colpensiones por concepto de mesadas pensionales retroactivas, su indexación y costas procesales del proceso ordinario.

- **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por Colpensiones, entidad que a través de su mandatario judicial lo sustentó en los siguientes términos:

“Decide el Despacho librar mandamiento de pago, respecto a una obligación de dar, esto es, retroactivo pensional, pensión de sobrevivientes en un porcentaje del 50% y costas procesales causadas en el proceso ordinario promovido por la señora Alba Liria Arango de Montoya, situación contraria a derecho puesto que no han transcurrido los diez (10) meses desde que quedo en firme la sentencia del proceso ordinario.

Respecto a lo anterior, el 98 de la Ley 2008 de 2019, señala que: La Nación, las entidades territoriales o cualquier entidad del orden central o descentralizada por servicios condenadas judicialmente al pago de sumas de dinero consecuencia del reconocimiento de una prestación del Sistema de Seguridad Social Integral, pagarán dichas sumas con cargo a los recursos de la seguridad social en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con el artículo 307 de la Ley 1564 de 2012, Además, el artículo 192, inciso 2, del CPACA nos dice “Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.”

De lo señalado, en las referidas normas se puede concluir, que solamente se puede dar inicio al proceso ejecutivo en contra de las entidades públicas, y de aquellas del orden central o descentralizada por servicios condenadas judicialmente al pago de sumas de dinero consecuencia del reconocimiento de una prestación del sistema de seguridad social integral, únicamente si ya han transcurrido los diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.

De esta manera, siendo colpensiones una entidad descentralizada y condenada al pago de sumas de dinero consecuencias de prestaciones del sistema integral de la seguridad social, el despacho debió negar el mandamiento de pago, y en su lugar debió haber realizado un control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades o irregularidades del proceso, como las que en este momento se presentan.

Pues la obligación de dar, en cabeza de colpensiones solo era exigible una vez hayan pasados los diez (10) meses a partir de la firmeza de la sentencia judicial, pues la entidad utiliza dicho periodo de tiempo, para dar cumplimiento al fallo que incorpora una obligación dineraria.

Pues se infiere que la obligación a cargo de colpensiones solo era exigible una vez haya transcurrido dicho periodo de tiempo, situación que no se presenta en el caso en consideración pues la sentencia quedo ejecutoriada tan solo hasta el día 24 de mayo de 2022, lo que significa que la demanda ejecutiva como mínimo se debió haber presentado para febrero de 2023 y no antes, como ocurre en el actual proceso donde la demanda ejecutiva se radica el día 24 de noviembre de 2022, seis meses después de la ejecutoria de la sentencia.

De tal forma que, antes de librar mandamiento de pago el juez debió analizar si el título ejecutivo cumplía con los requisitos de forma y de fondo, pues en esta fase inicial del proceso ejecutivo, el estudio del Juez no vira en torno a la extinción o modificación de la obligación, pues esto último corresponde a cuestiones de fondo que deben formularse a través de excepciones.

Finalmente hacer referencia a que de conformidad con el artículo 132 del CGP, agotada cada etapa procesal el Juez oficiosamente debe realizar un control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades o irregularidades del proceso, lo que, a su vez, constituye un deber del Juez en los términos del art. 12 del CGP.

En consecuencia, al no ser exigible la obligación contenida en el fallo judicial, le solicito al despacho conceda el recurso interpuesto y se disponga a revocar el auto que libro mandamiento de pago en contra de colpensiones y en favor del demandante en lo relacionado con las costas procesales.”

- **ALEGATOS:**

Colpensiones: *“De lo señalado, en las referidas normas se puede concluir, que solamente se puede dar inicio al proceso ejecutivo en contra de las entidades públicas, y de aquellas del orden central o descentralizada por servicios condenadas judicialmente al pago de sumas de dinero consecuencia del reconocimiento de una prestación del sistema de seguridad social integral, únicamente si ya han transcurrido los diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. De esta manera, siendo colpensiones una entidad descentralizada y condenada al pago de sumas de dinero consecuencias de prestaciones del sistema integral de la seguridad social, el despacho debió negar el mandamiento de pago, y en su lugar debió haber realizado un control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades o irregularidades del proceso, como las que en este momento se presentan. Pues la obligación de dar, en cabeza de colpensiones solo era exigible una vez hayan pasados los diez (10) meses a partir de la firmeza de la sentencia judicial, pues la entidad utiliza dicho periodo de tiempo, para dar cumplimiento al fallo que incorpora una obligación dineraria. Pues se infiere que la obligación a cargo de colpensiones solo era exigible una vez haya transcurrido dicho periodo de tiempo, situación que no se presenta en el caso en consideración pues la sentencia quedo ejecutoriada tan solo hasta el día 24 de mayo de 2022, lo que significa que la demanda ejecutiva como mínimo se debió haber presentado para febrero de 2023 y no antes, como ocurre en el actual proceso donde la demanda ejecutiva se radica el día 24 de noviembre de 2022, seis meses después de la ejecutoria de la sentencia (...) Finalmente hacer referencia a que de conformidad con el artículo 132 del CGP, agotada cada etapa procesal el Juez oficiosamente debe realizar un control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades o irregularidades del proceso, lo que, a su vez, constituye un deber del Juez en los términos del art. 12 del CGP.”*

CONSIDERACIONES:

El auto recurrido, conforme lo preceptúa el numeral 8° del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es susceptible del recurso de apelación, toda vez que el mismo resuelve sobre el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo, por lo que es válido que el Tribunal asuma el conocimiento del mismo.

Por auto del 7 de diciembre de 2022, el juzgado del conocimiento, esto es, el Decimonoveno Laboral del Circuito de Medellín, libró mandamiento de pago en favor de la ejecutante y en contra de Colpensiones, al señalar que se encuentran acreditadas las condiciones necesarias para que se libre el mencionado mandamiento; Colpensiones se opuso a la decisión anterior, advirtiendo que la obligación no es actualmente exigible, toda vez que se presentó la demanda ejecutiva por fuera del término de 10 meses de que tratan los artículos 98 de la ley 2008 de 2019 y 192, inciso 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Atendiendo a la apelación formulada por la ejecutada, el problema jurídico que abordará esta Sala para resolver será determinar si para promover la presente demanda ejecutiva se debía esperar o no el vencimiento del término de 10 meses.

Pues bien, para resolver el problema planteado se debe partir de la normatividad que regula el tema. De una parte, el artículo 98 de la Ley 2008 de 2019 al que alude Colpensiones en su recurso fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional mediante sentencia C-167 de 2021, por lo que no es viable pretender la aplicación de una normatividad que salió del ordenamiento jurídico.

Con relación al artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este no es de aplicación en la jurisdicción ordinaria, ya que su implementación se da es ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, a falta de disposiciones especiales frente a un tema, el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social remite al Código General del Proceso por aplicación analógica. Es por ello que, tratándose de procesos ejecutivos se dé aplicación a las disposiciones que frente al tema contempla esta última codificación, ya que en materia laboral no se cuenta con norma expresa que regule el tema.

Frente a la ejecución contra entidades de derecho público, el artículo 307 del Código General del Proceso señaló: *“Cuando la Nación o una entidad territorial sea condenada al pago de una suma de dinero, podrá ser ejecutada pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre su complementación o aclaración”*

La interpretación de dicha normatividad ha sido abordada por la Corte Constitucional en sentencia C-314 de 2021, en la que trató lo relacionado al concepto “Nación”, advirtiendo tal corporación que este concepto comprende *“...a las autoridades del sector central de la Rama Ejecutiva en el orden nacional...”*. Al respecto indicó la Corte en la citada providencia: *“Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que el concepto de Nación comprende a las autoridades del sector central de la Rama Ejecutiva en el orden nacional. En la sentencia C-221 de 1997 indicó: “(...) en general nuestra normatividad ha reservado la palabra “Nación”, en vez de la palabra “Estado”, para hacer referencia a las autoridades centrales y distinguirlas de las autoridades descentralizadas. Así, el artículo 182 de la Constitución derogada ordenaba a la ley determinar “los servicios a cargo de la Nación y de las entidades descentralizadas”. Ese lenguaje se ha mantenido en la Constitución de 1991, pues la Carta utiliza la palabra Nación cuando se refiere a las competencias propias de las autoridades centrales, mientras que la palabra Estado denota en general el conjunto de todas las autoridades públicas”. En el mismo sentido se refirió la sentencia C-385 de 2017: “cuando el artículo 307 del CGP hace referencia a la “Nación”, tal expresión es equivalente a la del “sector central de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional”.”*

Además de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, por vía de tutela, también ha tratado el tema relacionado con el término para demandar ejecutivamente a entidades de derecho público, advirtiendo tal corporación que, si bien en la jurisdicción ordinaria se debe dar aplicación al artículo 307 del Código General del Proceso, específicamente tal disposición no es aplicable cuando el ejecutado es Colpensiones, por no tratarse de una demanda dirigida a la Nación o a las entidades territoriales, ya que no se puede desconocer que la AFP ejecutada es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional. Así se pronunció la Corte en sentencia STP13282-2019, en la que aludió a la sentencia T-048 de 2019 de la Corte Constitucional:

“De hecho, la decisión de la Sala de Casación laboral, al amparar los derechos fundamentales invocados en favor de CARLOS ALBERTO VEGA MONTES, resulta acorde con el criterio expuesto por la Corte Constitucional en sentencia T-048/19, en la que esa Corporación, en torno a la ejecución de sentencias proferidas en

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, claramente sostuvo:

Sin embargo, la Sala considera que en el caso bajo estudio se produjo, en su momento, la vulneración de los derechos fundamentales señalados por el accionante, pues de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta providencia, cuando una autoridad pública, como en este caso Colpensiones, se abstiene de ejecutar oportunamente una orden proferida en una providencia judicial que le fue adversa, vulnera los derechos fundamentales de quien invocó su protección, y desconoce la cosa juzgada, como garantía del ordenamiento jurídico.

En el caso concreto, el término de 10 meses previsto en el artículo 307 del Código General del proceso e invocado por Colpensiones, es irrazonable, pues no era aplicable para el efectivo cumplimiento de la orden proferida por los jueces ordinarios laborales para el debido reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor Eduardo González Madera. Lo anterior, comoquiera que dicha norma, se encuentra dirigida a la Nación o a las entidades territoriales y no a otro tipo de autoridades administrativas, como Colpensiones que es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional (artículo 1º del Decreto 4121 de 2011), con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente.

En contraste, al examinar las normas generales sobre la ejecución de la sentencias, el artículo 305 del Código General del Proceso señala que “podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso”.

Por su parte, en aquellos casos en los que esta Corporación ha ordenado el reconocimiento y pago de derechos prestacionales reconocidos judicialmente, se ha dispuesto la inclusión en nómina pensional de los ciudadanos en términos de, incluso, 24 horas. Y en otras decisiones, de acuerdo con las particularidades del caso, ha considerado que para el cumplimiento de la providencia judicial se debe cumplir la respectiva orden dentro de un “plazo razonable”, el cual, en todo caso, debe ser oportuno, celer y pronto.

Como se refirió en el apartado correspondiente, la Corte ha señalado que tratándose del cumplimiento de providencias judiciales que han reconocido el pago de derechos pensionales, y que corresponden a obligaciones de dar, resulta una obligación de las autoridades administrativas concernidas el acatamiento del fallo y la materialización de los derechos prestacionales a través de la incorporación oportuna y celer en la nómina de quién adquirió la calidad de pensionado. Lo anterior, comoquiera que el ciudadano afectado, previamente, ha acudido ante la jurisdicción ordinaria para resolver una controversia, que le ha sido fallada favorablemente a sus intereses y pretensiones. Por lo que someterlo a una espera adicional cuando su derecho pensional ya ha sido reconocido sería una carga desproporcionada que tendría que asumir.”

Atendiendo a lo anterior se concluye que, en materia de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, por no contar con norma expresa que regule el trámite de los procesos ejecutivos se debe remitir a las disposiciones que frente al tema trata el Código General del Proceso; si bien el artículo 307 de la codificación anterior regula que las ejecuciones se podrán realizar pasados 10 meses desde la ejecutoria de la providencia, lo cierto es que ello aplica únicamente para las entidades de derecho público como la Nación, entendiéndose por esta el sector central de la Rama Ejecutiva en el orden

nacional, así como entidades territoriales, esto es, los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas.

Por su parte Colpensiones, por ser una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional no le es aplicable lo señalado en el artículo 307 Código General del Proceso, así como los artículos 98 de la ley 2008 de 2019 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Corolario de todo lo dicho, es aceptable que se pretenda la ejecución ante Colpensiones de aquellas obligaciones en las que no ha transcurrido un término de 10 meses desde la ejecutoria de la providencia, por tal motivo, la obligación contenida en la sentencia del 6 de abril de 2022 proferida por esta Sala de Decisión del Tribunal, por medio de la cual confirmó la del 14 de julio de 2021 emanada del Juzgado Decimonoveno Laboral del Circuito de Medellín, es actualmente exigible, reuniéndose como consecuencia las exigencias de que trata el artículo 422 del Código General del Proceso. En tales condiciones, el auto recurrido por vía de apelación merece ser **CONFIRMADO**.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por Colpensiones.

Las costas procesales de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir adelante la apelación formulada por Colpensiones, son de su cargo y en favor de la ejecutante. De conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$580.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**,

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** el auto recurrido que se revisa por vía de apelación de fecha y procedencia conocida.

Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 061 del 14 de abril de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>